

NACIONES UNIDAS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/Sub.2/1985/NGO/9
7 de agosto de 1985

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías
38º período de sesiones
Tema 11 del programa

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS POBLACIONES INDIGENAS

Declaración escrita presentada por el Consejo de los Cuatro Vientos,
organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva
(categoría II)

El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación, que se distribuye de conformidad con la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[6 de agosto de 1985]

Como lo señaló el distinguido experto de Ghana en el cuarto período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, las raíces del problema indígena están en el colonialismo. Las organizaciones indígenas han expresado la misma opinión y, reiteradamente, han insistido en su criterio de que la solución depende de la libre determinación, del gobierno propio o de la autonomía. La utilización de la expresión "libre determinación" alarma a muchos gobiernos porque la consideran sinónimo de independencia. Esto no es necesariamente así, pero es evidente que nosotros debemos volver a definir la libre determinación en el contexto indígena, y en el mundo postcolonial en general.

Libre determinación y descolonización

El principio de la libre determinación surge como una respuesta práctica a un problema histórico determinado: los imperios europeos que dominaban Africa, Asia y gran parte de las islas del Caribe y del Pacífico. El imperialismo, al concentrar el poderío mundial en unos pocos Estados europeos, fue considerado una amenaza inmediata para la paz y la seguridad mundiales, y se dio tan alta prioridad al rápido desmantelamiento de los imperios que se consagró poca atención a otras opciones que no fuese la independencia de las antiguas colonias. Es cierto que se emancipó a muchas colonias sin tener debidamente en cuenta los procesos democráticos, basándose exclusivamente en las consultas diplomáticas.

Como los territorios liberados estaban aislados de los Estados ya existentes y tenían considerables mayorías indígenas, no hubo objeciones prácticas reales a su independencia inmediata. No obstante, en algunos casos, la descolonización apresurada produjo la liberación de territorios más que de pueblos. Se dio prelación a las fronteras legales existentes, la mayoría de las cuales habían sido establecidas por conveniencia de las Potencias colonizadoras, con respecto a los criterios lingüísticos y culturales. Este es el motivo por el que algunas regiones han recibido un legado de tensiones no resueltas que lamentablemente fomentan los conflictos e invitan a las intervenciones del exterior que amenazan la integridad de los Estados de reciente independencia.

Esto sugiere la necesidad de examinar la posibilidad de una "segunda etapa" de descolonización, en la cual los Estados que acaban de obtener la independencia concierten acuerdos constitucionales regionales, incluidas disposiciones para la autonomía regional de distintos grupos étnicos territoriales, a fin de reconciliar las diferencias regionales y de reforzar la unidad nacional.

Libre determinación y "poblaciones indígenas"

Las "poblaciones indígenas", según se utiliza la expresión en las Naciones Unidas, se refieren en general a grupos aborígenes diferenciados sometidos a la administración externa dentro de Estados que han logrado su independencia antes del establecimiento del programa de descolonización de las Naciones Unidas. (Véase el "Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas" E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8, párr. 379; E/CN.4/1985/NGO/6). Por razones prácticas de seguridad, los Estados en general se han opuesto a considerar la posibilidad de independencia de esos grupos, invocando los principios de integridad territorial y unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General. No obstante, esas objeciones no excluyen necesariamente a las poblaciones indígenas del ejercicio de la libre determinación, ya que ésta puede incluir también diversas formas de autonomía o federalismo regional dentro de los Estados existentes, como lo sugirió la Asamblea General en sus resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV). Así pues, al ocuparse de enclaves ocupados por poblaciones indígenas, parecería sumamente razonable considerar la autonomía regional como una solución de transacción entre los principios de la libre determinación y de la integridad territorial. Según nuestra opinión, esta solución de transacción conduciría a un mayor grado de estabilidad y seguridad nacionales que el rechazo categórico de las aspiraciones de las poblaciones indígenas a una mayor libertad política, cultural y económica.

Esto no significa que no haya poblaciones indígenas que tengan derecho a la descolonización en el sentido tradicional. Muchos grupos que en la actualidad se clasifican como "indígenas", en realidad constituyen la mayoría de un Estado existente, como en algunas partes de América Central y América del Sur; o la mayoría en un territorio insular reclamado o controlado por un Estado vecino, como partes de Australasia y de América del Norte. En esos casos, no es necesaria ninguna solución de transacción entre los principios de la libre determinación y de la integridad territorial.

La libre determinación como derecho permanente

Según se indica en el reciente estudio del Secretario General sobre la participación popular (E/CN.4/1985/10), varios Estados sugieren que el derecho a la libre determinación continúa después de la independencia, pero de un derecho colectivo a la descolonización pasa a ser un derecho individual de participación democrática en el gobierno mediante, por ejemplo, elecciones libres. En otras palabras, esos Estados sostienen que la libre determinación incluye a la vez el derecho de un pueblo a formar su propio gobierno independiente, así como su derecho ulterior, en cuanto individuos, a ejercer el control de ese nuevo gobierno mediante procedimientos democráticos. A la vez que reconocemos el ideal de la participación de todos en el gobierno, encontramos que este derecho ya había sido consagrado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según la opinión de los que redactaron el Pacto, la libre determinación como derecho colectivo (artículo 1) y el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos (artículo 25) son conceptos diferentes.

¿Representa la libre determinación una especie de derecho colectivo, distinto de la participación popular, que continúa después de la independencia? Creemos que sí, que este derecho permanente dimana del hecho de que numerosos Estados, como resultado de la libre asociación en el momento de la independencia, o simplemente como resultado de su historia anterior a la misma, consisten en conjuntos de grupos territoriales de distinta cultura que se resisten a la integración en una nueva cultura nacional única. Sea que esos Estados de pluralidad cultural surjan de procesos voluntarios o involuntarios, nos parece que su supervivencia depende de su capacidad para respetar las diferencias regionales y reconciliar esas diferencias mediante acuerdos políticos regionales creativos. Todo programa de integración involuntaria probablemente fracasará, engendrará conflictos e invitará a la intervención del exterior.

Sugerimos por consiguiente que la concepción tradicional unitaria de los Estados independientes está perdiendo sentido práctico en nuestro mundo contemporáneo. El mismo criterio pragmático que condujo a la elaboración original del principio de libre determinación en el mundo de la posguerra de los imperios europeos, habla en favor del reconocimiento del derecho colectivo permanente de comunidades territoriales distintas a un grado negociado de autonomía en el mundo actual de Estados plurales.
